

Balance de las Juntas de Buen Gobierno

x Clajadep - [24.04.05 - 04:11]

México: balance de las Juntas de Buen Gobierno

Chiapas y las alternativas Zapatista

I Parte

La Jornada

La Fogata

Paz con Democracia, un organismo civil surgido en el contexto del conflicto de Chiapas, envió una misión de observación a la entidad sureña. Aquí publicamos la primera parte de un informe² que constata "la fortaleza del proceso autonómico zapatista". El grupo concluye que, a más de "un año de existencia de los Caracoles zapatistas, la experiencia de gobiernos que mandan obedeciendo destaca ante la crisis de legitimidad y credibilidad de la democracia formal y de la clase política que la sustenta". Igualmente, los observadores confirmaron "la persistencia del gobierno de mantener la guerra de contrainsurgencia y la administración del conflicto"

Paz con Democracia, organismo de la sociedad civil que surge en el contexto del conflicto en Chiapas, organizó del 17 al 20 de febrero del año en curso una misión de observación al estado. Desde la concepción de que el conflicto armado interno es expresión del conflicto estructural, la visita incluyó una serie de intercambios con distintos actores sociales y civiles de Chiapas a fin construir una visión más amplia y cercana a su percepción sobre el contexto actual.

Uno de los principales propósitos del grupo fue constatar los avances, problemas y retos de las Juntas de Buen Gobierno a partir de la tesis de que los procesos de construcción y prácticas de autonomías de hecho en territorio zapatista constituyen un fenómeno de trascendencia excepcional para un proyecto de nación alternativo con prácticas nuevas de participación y democracia directa.

Ya Pablo González Casanova adelantaba en septiembre de 2003: "La concreción del proyecto (de las Juntas de Buen Gobierno) se da al convertir las luchas por las autonomías y la creación de autonomías en redes de pueblos autónomos... Su propósito es crear con las comunidades, por las comunidades y para las comunidades, organizaciones de resistencia que desde ahora formen mallas a la vez articuladas, coordinadas y autogobernadas que les permitan mejorar su capacidad de contribuir a que otro mundo sea posible." (Perfil de La Jornada, 26 de septiembre de 2003).

Juntas de Buen Gobierno

A más de un año de existencia de los Caracoles zapatistas, la experiencia de gobiernos que mandan obedeciendo destaca ante la crisis de legitimidad y credibilidad de la democracia formal y de la clase política que la sustenta. Experiencia que se agiganta ante el contexto de cerco militar de penetración, guerra de desgaste, actividades de hostigamiento paramilitar, precariedad de la sustentación económica y alimenticia, y amenaza permanente de corporaciones y proyectos gubernamentales que afectan el territorio y los recursos naturales de los mayas zapatistas.

Paz con Democracia visitó cuatro de los cinco Caracoles (La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia y Oventic), realizando entrevistas a los integrantes de las respectivas Juntas de

Buen Gobierno con base en una guía que cubría temas generales de gobierno, justicia, economía, contrainsurgencia y paramilitarismo.

Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) se establecen a partir de que el gobierno federal cerró todas las puertas al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (febrero, 1996). Operan con base en las necesidades de la gente y a partir de las costumbres de cada zona, "de los modos de cada una". Las Juntas, sobre todo, "tienen que obedecer al pueblo, respetar la voz del pueblo, la decisión del pueblo".

Los gobiernos de los municipios autónomos y de las Juntas regionales tienen legalidad y legitimidad porque se establecen con fundamento y en concordancia con los Acuerdos de San Andrés y conforme los mandatos de las comunidades. Se considera a las Juntas como "una puerta más grande para caminar hacia delante" y se afirma que en el terreno de lo político, "están dando solución a los problemas de los municipios y, hombro con hombro con ellos, "las Juntas están dando resultados".

Dentro de las Juntas se representan los distintos Municipios Autónomos existentes en su zona. Así, las Juntas se integran por miembros de los distintos Concejos Municipales Autónomos, quienes son elegidos en su respectiva Asamblea Comunitaria, para integrarse a la Junta por un periodo de tres años. De esta manera, la Junta recoge la experiencia de cada Concejo, y garantiza su trabajo de tiempo completo a través de la rotación permanente (generalmente semanal) de sus miembros.

El cargo es honorífico, considerado como "servicio al pueblo" y sólo en ocasiones se cuenta con el pago puntual de algunos gastos de viaje por parte de las comunidades. Cada semana, cada 10 días o cada mes, según sea el caso, la Junta respectiva se renueva en su totalidad rotando (entre aquellos elegidos por un periodo de tres años), garantizando la continuidad en la atención de los asuntos de su competencia a partir de actas en las que quedan asentados los problemas resueltos y pendientes, elaborándose un informe anual con todo lo tratado por estas instancias regionales de gobierno.

Existiendo la revocación del mandato para quienes no cumplen en sus cargos, se privilegia no obstante las llamadas de atención para rectificar conductas anómalas o fallas en la tarea de algunos de sus miembros. Los integrantes de las Juntas no tienen necesariamente estudios formales o experiencia previa, pero se considera que el aprendizaje tiene lugar en el desarrollo mismo de la acción de gobernar.

La integración de mujeres va en aumento después de la autocrítica hecha por el vocero del EZLN sobre la escasa participación femenina en el primer año de las Juntas; además se observó la presencia de muchos jóvenes en las tareas de gobierno. Sin embargo, se informó sobre la consideración especial de que gozan los ancianos en las comunidades, en muchas de las cuales se agrupan como Principales o Consejos de Ancianos, en los que también participan mujeres.

Destaca el criterio zapatista de ruptura con la idea de que gobernar es un trabajo de profesionales de la política que van monopolizando los cargos públicos, constituyéndose en estamentos burocráticos que se adueñan de la representación y la información, las cuales utilizan para garantizar su permanencia y reproducción.

En contraste, las Juntas se constituyen en una escuela de democracia de todo el pueblo, pues centenares de personas van aprendiendo de "la experiencia, que es la que enseña", elevando el nivel y la amplitud de la conciencia colectiva.

En estos casi dos años de existencia puede notarse un alto grado de aceptación de la autoridad de las Juntas no sólo entre las bases de apoyo y las comunidades zapatistas, sino incluso entre priístas, autoridades oficiales municipales y estatales, llegando algunas de las Juntas a recibir "hermanos paramilitares" con quienes -a decir de sus integrantes- se ha llegado a "buenos acuerdos". En el imaginario de los habitantes de las

cinco Juntas de Buen Gobierno se han ganado la reputación de ser instancias donde "sí se resuelven los problemas", y, sobre todo, "sin mordidas o corrupción".

En cada Junta funciona una Comisión de Vigilancia, igualmente rotativa y nombrada también en asambleas. Estas funcionan como "Oficialía de Partes" y tienen a su cargo obtener los datos de quienes desean presentar asuntos a la Junta, clasificar los tipos de problemas y pasar todo ello a la instancia adjunta de gobierno. La Comisión de Vigilancia también está presente en las reuniones para que la "Junta no se vaya por el mal camino". Sin embargo, se observó que la vigilancia mayor sobre estos gobiernos regionales la ejercen las comunidades, fuente del poder y la representación, las cuales cuidan que se esté ejerciendo un buen gobierno bajo el principio máximo de "mandar obedeciendo".

No consta en la región bajo las Juntas de Buen Gobierno el conflicto interétnico, a pesar de que varios pueblos conviven en los territorios bajo su control, ya que "existe un solo rumbo para todos". La unidad entre los pueblos va aparejada al proceso autonómico, a la práctica de una amplia participación en el ejercicio del gobierno.

Impartición de justicia

La justicia es ejercida en diferentes niveles y por diversos actores. En una primera instancia están las autoridades municipales autónomas, los jueces municipales y los Consejos de Ancianos. Si el conflicto no es resuelto, pasa a la segunda instancia de las Juntas de Buen Gobierno.

La justicia zapatista, similar a la de otros pueblos indios, no utiliza la cárcel más que en casos y momentos extremos, pues se considera que el encierro tiene efectos negativos físicos y mentales. Se prefiere casi siempre la "reparación del daño", el trabajo comunal, el convencimiento y la reflexión sobre quienes mantienen conductas o realizan acciones no aprobadas por la comunidad (alcoholismo, prostitución, violencia intrafamiliar).

En los conflictos entre particulares operan la conciliación, la negociación entre las partes hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para las mismas. En este terreno, se atienden los problemas y se analiza cada uno de ellos para darle la razón "a quien la tenga" y sobre la base de que "todo se hace parejo". Para los casos graves, homicidio, violación, narcotráfico, se remite a los infractores a las autoridades oficiales, con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos. Así, el peor castigo es separar al presunto culpable de su comunidad y dejarlo en manos de la justicia estatal o federal, en las que no hay conciliación ni reparación del daño y el encierro es la pena establecida.

Sustentabilidad económica

La sustentabilidad del proyecto autonómico es uno de los aspectos que más preocupan a las Juntas de Buen Gobierno; por eso uno de los principales retos es conseguir una mayor autosuficiencia económica, produciendo y consumiendo desde las propias comunidades. La siembra del frijol, maíz y café, en muchas regiones realizada en forma colectiva, sigue siendo una de las principales actividades económicas, aunque hay conciencia del desgaste de la tierra en Los Altos, por ejemplo, por el uso de fertilizantes químicos; por ello, están aprendiendo a utilizar abonos orgánicos.

Paralelamente, varios proyectos productivos están en marcha: cooperativas para la exportación del café, talleres de zapatería, cooperativas de artesanías, tiendas y expendios de comida, café y miel. En algunas de las Juntas se cuentan con camiones utilizados para el transporte público y para sacar mercancía y evitar el coyotaje y el

intermediarismo.

El zapatismo, a través de la Juntas, expresa su determinación de defender el territorio y la tierra, pues hay conciencia de que éstos son la base de su cultura y de su existencia como pueblos. Expresan enfáticamente "si venden la tierra, se acabó; la tierra es nuestra madre; el campesino no sabe más que trabajar la tierra." La identidad como pueblo y como clase campesina explica la defensa histórica de su territorio físico y simbólico. También saben que la migración está afectando la vida comunitaria y el desarrollo autonómico, aunque señalan que éste es un fenómeno histórico y recuerdan que la migración no es de hoy, "nosotros migramos, fuimos jornaleros y trabajadores en fincas y ciudades".

No se pierde de vista tampoco que los proyectos económicos del gobierno tienen una finalidad contrainsurgente, cuya estrategia es "dividir a los pueblos, afectar la unidad de las comunidades". Por ello, explican, "hay compañeros que no entienden la lucha, y se entregan al gobierno." También están al tanto de la finalidad del Plan Puebla Panamá que "no es en beneficio del pueblo." Y ante ese tipo de programas señalan: "No vamos a permitir que los gobiernos pongan presas hidroeléctricas ni proyectos ecoturísticos. Luchamos para que no nos destruyan como zapatistas y como indígenas. Estamos en resistencia. No dependemos de nadie; no aceptamos nada del mal gobierno. Pedimos respeto y nosotros respetamos a los demás."

Educación y salud

La educación y la salud son dos importantes pilares del proceso autonómico. Los zapatistas no permiten que el gobierno imponga sus programas educativos, por lo que se cuenta con el trabajo de los promotores de educación que no reciben ningún pago y que preparan los programas y materiales para que los "niños aprendan el carácter y la razón de la lucha zapatista".

Se afirma que "estamos caminando para que nuestros hijos sepan valer sus derechos, que nadie los engañe, para que nuestros hijos tengan una educación autónoma." Los promotores son apoyados por las comunidades, muchas de las cuales destinan una milpa para su sustento. Hay decenas de escuelas primarias en territorio rebelde y en el Caracol de Oventic funciona la única secundaria autónoma zapatista.

A las clínicas asentadas en los Caracoles llegan enfermos de todas las denominaciones religiosas y políticas, pues los servicios ofrecidos se han ganado la confianza y la aprobación de la gente. Incluso han llegado hasta paramilitares y priístas recalcitrantes que han sido atendidos con igual esmero y profesionalismo. Hay en los Caracoles un concepto integral de salud por lo que se practica la medicina alópata, junto a la farmacopea comunitaria y la medicina tradicional. El proyecto de salud incluye planes de higiene y aplicación de vacunas, farmacia, consultorio dental, banco de sangre, quirófanos, hospitalización y sala de partos.

Ejército y paramilitares

En las Juntas de Buen Gobierno se tiene conciencia del papel del Ejército en sus territorios, de los estragos de la militarización, con su secuela de prostitución, alcoholismo y narcotráfico, de la actividad permanente de los paramilitares. Se considera que toda esta fuerza lo que busca es destruir. Sin embargo, a esta estrategia se opone la de los zapatistas que es construir sus autonomías. "Ellos representan la muerte, nosotros la vida. El gobierno tiene sus ejércitos, sostiene a los paramilitares y busca la

cabeza del EZLN. Sin embargo, los zapatistas tienen a la sociedad civil nacional e internacional que les ha dado todo el espacio para poder caminar." Frente al Ejército y los paramilitares, la respuesta de los zapatistas es "no caer en la provocación", lo que supone ejercer la tolerancia y buscar la reconciliación, valores no ajenos a las comunidades.

En el Caracol de La Garrucha, asiento de comunidades que fueron "quemadas" y "destruidas" por tropas federales después de la ofensiva militar de febrero de 1995, miembros de la JBG señalaron que el Ejército Mexicano "patrulla" los municipios autónomos, "está dentro del territorio zapatista" y "a veces utiliza a los paramilitares para hacer provocaciones (...) No nos confiamos. Puede haber otra traición, como la de (Ernesto) Zedillo". "El Estado nos atiende por pedacitos y nos hace pelear entre nosotros; nos divide". "El gobierno federal tiene su Ejército y sus paras. El Ejército quiere destruir las cabezas del Comité (Clandestino Revolucionario Indígena). Pero nosotros sabemos cómo defenderlos. (A nuestras comunidades) llegan convoyes del Ejército, tirando dulces a los niños. El gobierno no quiere escuchar que hay una organización rebelde. El gobierno quiere exterminarnos porque quiere traer inversiones de otros países. Lo que hacemos es resistir. Pero nosotros tenemos, además, al EZLN. Tenemos el respaldo de un ejército".

Esa visión que identifica entre las políticas gubernamentales la intención de "destruir" (aniquilar) al movimiento insurgente, fue recogida, también, en el Caracol de Roberto Barrios, donde la naturaleza de la acción militar del Ejército federal fue definida como una "guerra de baja intensidad" (GBI). "Lo que hace el gobierno es muy fino, nos aplica la guerra de baja intensidad. Nadie está tranquilo. (Los soldados) no están quietos. ¿Por qué? Porque saben que las bases de apoyo tampoco están quietas. Sólo que el zapatismo construye y el gobierno destruye". Además, el gobierno lleva a cabo "una guerra económica. Aplica políticas para dividir. A veces con frijoles. Con Maseca. Todo eso lo usa para dividir". Desde la perspectiva zapatista, se trata de "una lucha de resistencia en el territorio (...) Ahora tenemos territorio y lo vamos a defender".

Según el testimonio de un miembro de la JBG de Roberto Barrios, en los últimos meses "se está dejando ver mucha gente armada y encapuchada (paramilitares). Pero la gente no se confunde. Las bases de apoyo están en su trabajo, en las milpas (...) Los de Paz y Justicia no nacieron por arte de magia. Surgieron por los militares. Donde hay un campamento militar, es fuerte Paz y Justicia. Existe una relación entre el Ejército y el PRI, que reparte recursos". El gobierno formó una estructura paramilitar, "porque le conviene, no gasta en salarios y usa gente de la comunidad para que chingue a la comunidad. Su estrategia es la guerra de baja intensidad".

Conclusión sobre las JBG

Para Paz con Democracia, la visita a las Juntas de Buen Gobierno reveló la fortaleza del proceso autonómico zapatista; sus posibilidades de proyectar sus enseñanzas más allá de la geografía chiapaneca e incluso mexicana. También constató la persistencia del gobierno de mantener la guerra de contrainsurgencia y la administración del conflicto. Observamos que la resistencia, condición histórica de los pueblos indígenas, define las prácticas autonómicas de los mayas zapatistas, y éstas, a su vez, van construyendo ese mundo posible al que aspiramos todos y todas.

Las voces de los actores

II Parte

La Jornada

Para la Red por la Paz Chiapas, se trata de "una guerra integral de desgaste", que se caracteriza por la ausencia de una confrontación directa entre las partes. El gobierno federal sigue "administrando" el conflicto a través de estrategias militares, políticas y económicas "de tipo contrainsurgente", que buscan arrinconar y desgastar a las bases de apoyo zapatistas y a la dirigencia del grupo rebelde². No hay enfrentamientos, pero se mantiene el cerco y el hostigamiento militar contra el EZLN y sus bases. El "rostro más visible" de esa guerra integral de desgaste es la permanente militarización del territorio chiapaneco: existen 91 campamentos castrenses sólo en la zona de conflicto³.

Entre las consecuencias directas de las políticas oficiales se percibe una "descomposición del tejido social", con la consiguiente generación de conflictos inter e intracomunitarios, donde predomina una cultura de creciente intolerancia y una tendencia a dirimir las diferencias ideológicas, políticas o religiosas por medios violentos.

A ello se suman la crítica situación de más de 12 mil desplazados internos, producto de la guerra; la impunidad de los autores materiales e intelectuales de más de 120 acciones violentas, así como la no reparación de los daños ni el desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares que, junto con elementos del Ejército Mexicano, fueron protagonistas de los hechos.

Por su parte, desde abril de 2001, el otro actor armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mantiene la suspensión de todo contacto con el gobierno federal y los partidos políticos, y a partir de una lógica de no confrontación (armada) con el Estado, viene impulsando la construcción de una autonomía de carácter regional "por la vía de los hechos", a través de las Juntas de Buen Gobierno y sus caracoles.

En ese contexto, el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, si bien ha rehuído toda confrontación directa con el EZLN, viene adoptando medidas de "contrainsurgencia económica" contra los zapatistas y sus bases de apoyo civiles. Tales medidas, según la Red, son instrumentadas a través de políticas neoliberales en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP) y del Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis), financiado por la Unión Europea (que retoma el plan del Ejército para la Zona de las Cañadas), y de la reubicación forzosa de familias que habitan en la región de los Montes Azules.

Salazar fue acusado de practicar una política de "golpeteo selectivo" en contra de organizaciones campesinas y nuevos movimientos sociales que se movilizan por el no pago de tarifas excesivas por el consumo de energía eléctrica; contra la construcción de presas y represas, y en defensa de las reservas naturales ante la voracidad capitalista privada, encubierta en proyectos de "ecoturismo" y "proteccionistas" de la biodiversidad. A ello se suman las denuncias de que el gobernador Salazar ha venido cerrando espacios de participación popular a través de acciones legales de tipo coercitivo, como la llamada "Ley Mordaza" --que en materia de difamación y calumnia incorpora la figura sobre la falsedad de declaración en grado de tentativa--, la ley sobre pandillerismo (o antimaras), la de bioterrorismo y la de fiscalización.

Desplazados y paramilitarismo

A partir del informe recibido en Palenque de un grupo conformado por ocho (8) indígenas, familiares de muertos y desaparecidos de la Zona Norte de Chiapas, que fueron desplazados de sus comunidades en 1995 y 1996 luego de sendos ataques del

grupo paramilitar Paz y Justicia, la misión puede constatar la vigencia del conflicto y la multiplicación de actores.

Según un testimonio recogido, el gobernador Pablo Salazar "dice que no es como los anteriores gobiernos del PRI". De acuerdo con la visión oficial, "en Chiapas no hay desplazados y ya no existen problemas de tierra (...) Desde sus escritorios dicen que ya no hay conflicto. El gobierno dice que hay justicia porque hay algunos presos de Paz y Justicia. Pero no hay justicia. Algunas demandas han quedado congeladas. Además, nosotros no podíamos denunciar porque no teníamos libre tránsito. Queremos saber de nuestros muertos y desaparecidos. Tampoco hubo reparación de los daños (...) El gobierno ofrece reconciliación, ofrece vivienda. Pero dice: 'Olvídense de los muertos'. El gobierno dice que ha logrado la 'pacificación'. El gobierno nos engañó. Hay una estrategia construida por el gobierno".

Sobre la existencia del paramilitarismo en la fase actual, un indígena dijo en su testimonio: "El grupo paramilitar Paz y Justicia, creado por el Ejército y el gobierno, sí existe. Ellos (los paramilitares) siguen libres y nosotros desplazados, bajo amenazas y hostigamiento". Otro desplazado de Tila, señaló: "No logramos el desmantelamiento de Paz y Justicia. Siguen libres los autores intelectuales y los comandantes del Ejército, de Seguridad Pública y los diputados del PRI que estaban detrás de Paz y Justicia en Miguel Alemán. Siguen libres los que tuvieron el enlace con el gobierno, que se concentraban en Miguel Alemán y operaban en El Limar y Nuevo Limar: Marcos Albino Torres, Juan Martínez Pérez, Cristóbal Gómez Torres, Samuel Sánchez Sánchez, Raymundo Hernández Trujillo (...) Hubo muchos muertos y desaparecidos. Raymundo Hernández sigue libre; es el que organiza a la gente ahora. Es uno de los mandones. Mientras no vaya preso, seguirán las amenazas".

"Tampoco han tocado a Rodolfo Aleu, el candidato opuesto al priísta Juan José Díaz Solórzano, quien a su vez cuenta con el apoyo del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo y los sectores 'duros' (del PRI) en Chiapas y Tabasco. Las armas para los paras vienen de Villa Hermosa, Tabasco. Rodolfo Aleu entró a la alianza con el PRD y el PT, porque perdió (en la interna de Paz y Justicia). Aleu sigue las órdenes de Diego Vázquez (preso). El comité municipal del PRD en Tila dudó mucho en entrar en la alianza con Paz y Justicia (pero entró). "Los paramilitares están 'vivos' donde hay un cuartel militar, está Seguridad Pública y controlan los priístas, que manejan mucho dinero. Un caso: Miguel Alemán. Ahí se está rearticulando Paz y Justicia, igual que en Cruz Palenque, bajo el liderazgo de Pedro Mayo".

Otro testimonio: "Los dirigentes (de Paz y Justicia) libres, son los que están reorganizando a la gente. Son ex militares, como el capitán Juan Bautista. Otro ex militar, es Pascual Gómez Velasco, de Nuevo Limar, sucesor de Diego Vázquez. Están los soldados (rasos) Miguel Gómez Pérez y Gilberto López Jiménez. Y otro, no militar, pero que era comandante de Paz y Justicia: Eulalio Martínez Vázquez (...) En la época en que el general Mario Renán Castillo comandaba la VII Región Militar⁶, los jefes operativos eran el general Mario Reyes y el general Herrera.⁷ Además estaban el capitán Juan Bautista y el mayor Adeliz Luna, quien prestaba su convoy a Paz y Justicia. Él era quien hacía 'labor social' (acción cívica); entregaba despensas, atendía la salud (...)

"No se ve que hoy el Ejército esté apoyando a Paz y Justicia. Pero hay apoyo a la paramilitarización vía los diputados que tienen: Jorge Utrilla Robles (diputado federal) y Edgar Martín (diputado local), ambos de Yajalón. Allí donde hay un destacamento del Ejército siguen las amenazas a las comunidades. El contacto con Paz y Justicia, hoy, a través de Díaz Solórzano, es la Seguridad Pública. En el operativo de Tila (febrero de

2005)8, la Seguridad Pública actuó con violencia, como en la época del conflicto. Fue el mismo tipo de operativo. También estaba la Policía Municipal (que opera en las comunidades). Ellos y los de Paz y Justicia son los que señalan a la gente".

Contexto Económico y Social

La falta de solución a las causas del conflicto ha llevado al empobrecimiento de comunidades y al permanente deterioro del tejido social, provocando mayor conflictividad y volatilidad en las relaciones sociales. Algunos de los rasgos que expresan esta tendencia, además de los saldos derivados de la guerra (desplazados, militarización y paramilitarización) son entre otros: la problemática en la frontera; la presencia del narcotráfico y de actores violentos como los "maras"; la creciente migración y los numerosos asesinatos de mujeres, alcoholismo, prostitución, etc. Otra característica importante del momento que se vive ahora es la multiplicación de actores y agendas sociales, tales como la resistencia a las tarifas de luz, la lucha magisterial, la defensa de derechos humanos individuales y colectivos, así como diversas articulaciones antineoliberales y en defensa del territorio y los recursos. Todo ello en un contexto político de impunidad, deslegitimación de la democracia partidaria, privatización del uso de la fuerza, imposición de programas de desarrollo y reformas jurídicas como las llamadas "ley modaza" y "ley antimaras" de corte autoritario y violatorias de libertades políticas y derechos humanos. Este proceso de complejización del contexto y diversificación de luchas sociales, se observó en la visita a partir de la presencia en eventos y diálogo con algunos de estos actores.

Paz con Democracia conoció sobre el avance de los proyectos de desarrollo de corte neoliberal que se están impulsando en el estado, a través de la participación de una delegación del grupo en el "Segundo Encuentro de Comunidades en reservas de la biosfera y Campesinas", realizado en la comunidad de Nuevo Francisco León en Ocosingo, Chis. Con 350 representantes y alrededor de 50 comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California y Chihuahua, se elaboró una agenda común de "defensa del territorio y nuestros recursos" y se plantearon las siguientes ideas centrales: Se sigue negando el derecho de los pueblos indios a la consulta según lo establecido en el Convenio 169 y en los Acuerdos de San Andrés. Los actuales programas gubernamentales atentan gravemente contra los territorios ancestrales propiciando la privatización de la tierra, la mercantilización de los recursos, la contaminación y el uso de transgénicos, así como la destrucción de áreas naturales con grandes obras de infraestructura. Hay una situación de violación sistemática a los derechos agrarios, los derechos indígenas y los derechos ambientales de comunidades y pueblos en reservas. Detrás de la presión sobre el territorio y sus recursos están los intereses de grandes corporaciones multinacionales como Monsanto, Bayer, Adventis, Coca Cola y Nestlé, entre otras.

Para avanzar colectivamente en esta defensa se planteó fortalecer y consolidar la organización de comunidades, pueblos y regiones, partiendo de valores propios y de los sistemas normativos internos para la defensa del territorio. Realizar una amplia labor de información y difusión en los pueblos. Generar mecanismos de coordinación para llevar a cabo las tareas acordadas, brindar asesoría técnica jurídica y para extender una red de contacto y comunicación entre organizaciones y comunidades que comparten esta problemática. Exigir el derecho a consulta aplicando el convenio 169 de la OIT. Rechazar el Procede como vía para la privatización de la propiedad social de la tierra. Este proceso ejemplifica los ejes emergentes de articulación que logran convocar a muy

diversos actores de distintas regiones del país en una agenda común de construcción alternativa: comunidades indígenas, organizaciones campesinas, organismos civiles, agentes pastorales, investigadores, comunicadores y solidarios internacionales en un nuevo tipo de redes incluyentes y flexibles.

Sobre las distintas luchas y conflictos específicos que se han generado en el estado y se mantienen sin canales para su procesamiento y solución, se realizó un encuentro con organizaciones sociales en el cual fueron planteados los siguientes casos: Represión a familias de Petalcingo, Cántico y Nueva Esperanza por operativo policiaco.

Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia. Represión a miembros de Casa del Pueblo, Venustiano Carranza. Comités de ciudadanos en resistencia para el pago de consumo de energía eléctrica por cobros excesivos. La lucha contra la ley mordaza; contra la ley de Bioseguridad. La lucha del Comité pro – liberación de David Meza y justicia para Neyra Azucena Cervantes, víctima de los feminicidios en Juárez.

Se considera que para la comprensión de la actual situación se requiere reconocer la emergencia de nuevas dinámicas, redes y actores sociales, nuevos espacios de convergencia y construcción de alternativas que deben ser integradas al análisis más completo de la nueva etapa del conflicto que vive el país en Chiapas, que al mismo tiempo que lo hacen más complejo, lo enriquecen con las múltiples formas organizativas y creativas de responder a las diversas demandas y aspiraciones sociales.

Un intento de caracterización del conflicto y los actores en la etapa actual.

A once años del estallido de la insurrección campesino indígena zapatista, el contexto internacional está hoy regido por la hegemonía imperial de Estados Unidos, que bajo la coartada de la "guerra al terrorismo" y la defensa de su "seguridad nacional", viene impulsando lo que ha dado en llamarse un neoliberalismo de guerra. Se trata de un modelo en el cual las políticas económicas y financieras neoliberales y la militarización del mundo van de la mano y se retroalimentan.

Las políticas unilaterales de Estados Unidos han erosionado las soberanías nacionales y debilitado en extremo al sistema de Naciones Unidas, y el mundo vive hoy bajo la amenaza del surgimiento de un nuevo autoritarismo violento, que utiliza la guerra preventiva, la mercenarización de los conflictos y la tortura científica como práctica cotidiana, y que ha sido señalado por sus componentes neonazis. Con un nuevo elemento que ha comenzado a emerger durante el segundo mandato de George W. Bush: la eventual utilización de escuadrones de la muerte (paramilitarismo), como parte de la diplomacia de guerra de Washington a escala mundial.

La concepción oficial vigente sobre el conflicto, su regulación y su solución son las que se establecen en la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", aprobada el 11 de marzo de 1995 como marco jurídico propiciatorio, en cuyo Artículo 1º reconoce la existencia de un "conflicto armado", sin abundar en su definición, pero reconociendo su naturaleza político-militar. Esta Ley establece que el EZLN como actor armado es una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas. Aunque se le coloca en una dimensión estatal, se asume que sus causas, y por tanto, las soluciones necesarias, son de orden político, social, cultural y económico.

Sin embargo, actualmente el gobierno lo califica como "un conflicto de naturaleza política local que ya superó la fase de confrontación armada". Sostiene que su dimensión es regional e involucra múltiples actores locales, que obedece a una grave situación histórica de carencias sociales y marginación de las comunidades indígenas, así como a una intensa conflictividad extra, intra e intercomunitaria derivada de motivos

religiosos, ideológicos y políticos. Su estrategia se establece entonces en el impulso de programas de gasto social y de mecanismos de concertación comunitaria para atender la problemática local. Asimismo, explica la presencia militar como una garantía necesaria para asegurar el orden público, vigilar la frontera, combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad nacional en tanto existe una declaración de guerra. En este marco, el conflicto con el EZLN es sólo uno de los componentes del problema.

Para el EZLN, en cambio, se trata de un conflicto armado que ha derivado en una guerra de exterminio, dirigida contra las formas de vida y reproducción comunitarias y que opera bajo la forma de una guerra de baja intensidad, desde una visión de Estado que mantiene la lógica militar como factor dominante para imponer su solución. Frente a ésta, el movimiento zapatista define una estrategia de resistencia activa y autónoma, y de acumulación política y territorial de fuerzas, dirigiendo su discurso y acciones contra las fuentes de legitimidad del Estado. Sostiene que sus causas son estructurales y nacionales, y que para resolverlas se requiere de una profunda transformación del Estado y del modelo económico, a partir del reconocimiento de los derechos indígenas, lucha que es hoy elemento identitario fundamental del movimiento.

A partir de esas dos concepciones, y de las denuncias formuladas a la misión de Paz con Democracia, por diversos actores chiapanecos, que aluden indistintamente a la existencia de una acción bélica gubernamental bajo las modalidades de "guerra integral de desgaste", "guerra de baja intensidad" y "guerra económica", y que alertan sobre una rearticulación de los grupos de poder político y económico tradicionales, así como de una reactivación de bandas paramilitares con apoyo del Ejército, la Seguridad Pública y el PRI local y nacional, podemos concluir que el conflicto de tipo militar sigue vigente, no obstante ese componente no se haya ejercido de manera intensiva y constante en la confrontación entre las partes.

La ausencia de las formas de la guerra abierta no indica el fin del conflicto, sino que a partir de la estrategia del Ejército federal, éste se manifiesta como una guerra contrainsurgente. La concepción y la estrategia del Estado siguen estando signadas por la lógica militar. Como parte del conflicto, el gobierno y el Ejército nacionales siguen actuando en la lógica autoritaria del Estado, desplegando su fuerza de manera desproporcionada. En la zona de conflicto el Ejército garantiza el control territorial, administra y canaliza la violencia, y según la coyuntura podrá recurrir nuevamente a una fase de paramilitarización.

En tanto no asume el carácter estructural del conflicto, la dimensión nacional y profunda de sus causas, la capacidad referencial del EZLN para diversos sectores de la sociedad mexicana y particularmente para los pueblos indígenas, el gobierno federal ha optado por un esquema de achicamiento y de desgaste, procurando imponer soluciones a partir de sus diversas estructuras de poder, particularmente el uso de la fuerza.

A su vez, el rápido viraje estratégico del EZLN hacia la ponderación de la lucha política e ideológica, dentro y fuera de los marcos políticos institucionales de cambio y manteniendo una resistencia armada sin enfrentamientos bélicos en los territorios bajo su influencia, así como el fortalecimiento de su capacidad discursiva y de comunicación contra las fuentes de legitimidad del Estado, establecen una disputa no sólo en términos de causas y proyectos, sino modos de confrontación y vías de solución.

Como actor de nuevo tipo, estratégicamente, el EZLN no plantea la destrucción, sino la transformación del Estado. El uso de las armas tiene un sentido político, y su eje no es la victoria militar o la toma del poder, sino la defensa de la dignidad entendida como la lucha por los derechos sociales, la identidad y la justicia. La resistencia armada que oponen al régimen se dirige más a desarticular los factores de la violencia estructural del sistema, que a la aniquilación física del adversario. El EZLN ha convertido su

representación simbólica y capacidades mediáticas en pieza fundamental de la disputa por la legitimidad entre el Estado y el movimiento.

En ese escenario hay que consignar también que el conflicto se ha trasladado a otros actores y agendas. Es notable la irrupción de nuevos actores, la reactivación de organizaciones campesinas y el crecimiento de la resistencia civil, así como el avance de los planes oficiales neoliberales (Plan Puebla Panamá, ALCA) y la puesta en marcha de otros como el Prodesis, bajo el paraguas de la Unión Europea, que colocan al territorio chiapaneco, en particular a la selva Lacandona y los Montes Azules, como eje de una disputa intercapitalista e interatlántica por los recursos energéticos y genéticos, bajo pantallas "conservacionistas" y "eco turísticas".

Pugna en la que se inscriben, además, la Ley de Bioseguridad aprobada por el Senado mexicano el 15 de febrero de 2005 y la compra de la multinacional mexicana Seminis, del Grupo Savia-Pulsar, del magnate mexicano Alfonso Romo, por la compañía Monsanto, líder mundial en granos y oleaginosas genéticamente modificados, lo que ubica a esa firma de capital estadounidense, favorecida por la administración Bush, en el acceso sur de la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules, rica en agua, biodiversidad y reservas forestales. Ambos hechos no están desligados de la política de expulsión de familias indígenas, en su mayoría bases de apoyo zapatistas, de la zona de Montes Azules.

A partir de estos datos de la coyuntura, Paz con Democracia invita a los movimientos sociales y populares del país a insistir en la necesaria supeditación de la lógica y los actores militares a la lógica y las necesidades de la política, y por ello, como antes, frenar la militarización, paramilitarización, impunidad y polarización crecientes. A mediano plazo, se trata de rehacer las vías y condiciones para una solución política negociada y orientada a la solución de las causas estructurales y nacionales. Para ello, es necesario además rehacer el vínculo del conflicto y de la paz con la necesaria construcción y transformación democrática y de justicia.

Notas

1. En la visita participaron Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Dolores González, Fernanda Navarro, Gilberto López y Rivas, Luis Menéndez, Luis Villoro, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, Pablo Romo, Paulina Fernández y Teresa Estrada. Además, este texto es suscrito por Adelfo Regino, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Guillermo Briceño, Juan Bañuelos, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Oscar González, Pablo González Casanova, Rafael Moreno Villa y Víctor Flores Olea.
2. Reunión de Paz con Democracia con la Red por la Paz Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 17 de febrero de 2005. Ver "Ejes de análisis de coyuntura" de la Red por la Paz Chiapas. Febrero de 2005.
3. "La ocupación militar en Chiapas. El dilema del prisionero". Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, A. C. (Capise). San Cristóbal de las Casas, 2004.
4. El 22 de febrero, un día después de concluida la misión de observación del grupo de Paz con Democracia en Chiapas, la Fiscalía General del estado dio a conocer la detención de uno de los máximos líderes de Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez, en el municipio de Tila. Sánchez, un indígena chol, quien fue señalado el 16 de febrero por el párroco del Señor de Tila, Heriberto Cruz Vera, como uno de "los hombres de confianza" del nuevo presidente municipal, Juan José Díaz Solórzano, está acusado de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, en agravio de los entonces militantes de la organización pro zapatista Abu-Xu. Sánchez había sido

detenido con anterioridad, en octubre de 2000. En esa ocasión también fue acusado de múltiples homicidios y otros agravios contra bases zapatistas de la Zona Norte de Chiapas. A los seis meses fue exculpado de los cargos "por falta de evidencias" y su expediente, según fuentes de la fiscalía, "desapareció". Ver Juan Balboa, "Paz y Justicia busca reactivar la violencia en Chiapas: párroco de Tila", y Ángeles Mariscal, "Detuvieron en el operativo de Tila a Samuel Sánchez, máximo líder del paramilitar Paz y Justicia", La Jornada, 23 de febrero de 2005.

5. El citado Juan Bautista aparece con el rango de "general" y "comandante de unidad" del destacamento del Ejército mexicano en El Limar, Tila, en 1996, según el testimonio vídeo grabado de un testigo que figura en el informe "La política genocida en el conflicto armado en Chiapas", del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (enero de 2005), que ha sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mismo informe lo señala como coordinador de las acciones del grupo paramilitar Paz y Justicia.

6. El general de división DEM Mario Renán Castillo, fue comandante de la VII Región Militar entre 1995 y 1997. Es mencionado varias veces en el testimonio citado en la llamada anterior. Está sindicado como el autor del plan de campaña militar en Chiapas y se le atribuye la edición del Manual de Guerra Irregular, Tomo I y II, del Ejército Mexicano, de 1996. Según varios reportes es el creador de los grupos paramilitares en Chiapas. Asimismo, firmó como "testigo de honor" en un convenio mediante el cual el gobierno entregó \$ 4, 600,000 (pesos) a líderes de SOCAMA y Paz y Justicia en 1996.

7. Se trata, presuntamente, del general de brigada DEM Alberto Martínez Herrera, comandante de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo, Chiapas (1993-2005), ejecutor del plan de campaña militar.

8. El 15 de febrero de 2005, policías estatales desalojaron de forma violenta a cientos de indígenas militantes del Partido de la Revolución Democrática, quienes el 28 de diciembre pasado habían ocupado las instalaciones de la presidencia municipal de Tila, en demanda de que fuera revocado el triunfo electoral priísta. El gobierno estatal que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, recalcó en un comunicado que "aplica el legítimo uso de la fuerza pública". Ver Elio Henríquez y Ángeles Mariscal, "Desalojan a perredistas de la alcaldía de Tila, Chiapas; 19 desaparecidos". La Jornada, 16 de febrero de 2005.

Notas

1) En la visita participaron Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Dolores González, Fernanda Navarro, Gilberto López y Rivas, Luis Menéndez, Luis Villoro, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, Pablo Romo, Paulina Fernández y Teresa Estrada. Además, este texto es suscrito por Adelfo Regino, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Guillermo Briceño, Juan Bañuelos, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Oscar González, Pablo González Casanova, Rafael Moreno Villa y Víctor Flores Olea.

Balance de las Juntas de Buen Gobierno. II Parte
x Clajadep - [30.04.05 - 04:53]
Mexico: balance de las Juntas de Buen Gobierno

Las voces de los actores
II Parte

La Jornada La Fogata

Para la Red por la Paz Chiapas, se trata de "una guerra integral de desgaste", que se caracteriza por la ausencia de una confrontación directa entre las partes. El gobierno federal sigue "administrando" el conflicto a través de estrategias militares, políticas y económicas "de tipo contrainsurgente", que buscan arrinconar y desgastar a las bases de apoyo zapatistas y a la dirigencia del grupo rebelde². No hay enfrentamientos, pero se mantiene el cerco y el hostigamiento militar contra el EZLN y sus bases. El "rostro más visible" de esa guerra integral de desgaste es la permanente militarización del territorio chiapaneco: existen 91 campamentos castrenses sólo en la zona de conflicto³.

Entre las consecuencias directas de las políticas oficiales se percibe una "descomposición del tejido social", con la consiguiente generación de conflictos inter e intracomunitarios, donde predomina una cultura de creciente intolerancia y una tendencia a dirimir las diferencias ideológicas, políticas o religiosas por medios violentos.

A ello se suman la crítica situación de más de 12 mil desplazados internos, producto de la guerra; la impunidad de los autores materiales e intelectuales de más de 120 acciones violentas, así como la no reparación de los daños ni el desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares que, junto con elementos del Ejército Mexicano, fueron protagonistas de los hechos.

Por su parte, desde abril de 2001, el otro actor armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mantiene la suspensión de todo contacto con el gobierno federal y los partidos políticos, y a partir de una lógica de no confrontación (armada) con el Estado, viene impulsando la construcción de una autonomía de carácter regional "por la vía de los hechos", a través de las Juntas de Buen Gobierno y sus caracoles.

En ese contexto, el gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, si bien ha rehuído toda confrontación directa con el EZLN, viene adoptando medidas de "contrainsurgencia económica" contra los zapatistas y sus bases de apoyo civiles. Tales medidas, según la Red, son instrumentadas a través de políticas neoliberales en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP) y del Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis), financiado por la Unión Europea (que retoma el plan del Ejército para la Zona de las Cañadas), y de la reubicación forzosa de familias que habitan en la región de los Montes Azules.

Salazar fue acusado de practicar una política de "golpeteo selectivo" en contra de organizaciones campesinas y nuevos movimientos sociales que se movilizan por el no pago de tarifas excesivas por el consumo de energía eléctrica; contra la construcción de presas y represas, y en defensa de las reservas naturales ante la voracidad capitalista privada, encubierta en proyectos de "ecoturismo" y "proteccionistas" de la biodiversidad. A ello se suman las denuncias de que el gobernador Salazar ha venido cerrando espacios de participación popular a través de acciones legales de tipo coercitivo, como la llamada "Ley Mordaza" --que en materia de difamación y calumnia incorpora la figura sobre la falsedad de declaración en grado de tentativa--, la ley sobre pandillerismo (o antimaras), la de bioterrorismo y la de fiscalización.

Desplazados y paramilitarismo

A partir del informe recibido en Palenque de un grupo conformado por ocho (8) indígenas, familiares de muertos y desaparecidos de la Zona Norte de Chiapas, que fueron desplazados de sus comunidades en 1995 y 1996 luego de sendos ataques del

grupo paramilitar Paz y Justicia, la misión puede constatar la vigencia del conflicto y la multiplicación de actores.

Según un testimonio recogido, el gobernador Pablo Salazar "dice que no es como los anteriores gobiernos del PRI". De acuerdo con la visión oficial, "en Chiapas no hay desplazados y ya no existen problemas de tierra (...) Desde sus escritorios dicen que ya no hay conflicto. El gobierno dice que hay justicia porque hay algunos presos de Paz y Justicia. Pero no hay justicia. Algunas demandas han quedado congeladas. Además, nosotros no podíamos denunciar porque no teníamos libre tránsito. Queremos saber de nuestros muertos y desaparecidos. Tampoco hubo reparación de los daños (...) El gobierno ofrece reconciliación, ofrece vivienda. Pero dice: 'Olvídense de los muertos'. El gobierno dice que ha logrado la 'pacificación'. El gobierno nos engañó. Hay una estrategia construida por el gobierno".

Sobre la existencia del paramilitarismo en la fase actual, un indígena dijo en su testimonio: "El grupo paramilitar Paz y Justicia, creado por el Ejército y el gobierno, sí existe. Ellos (los paramilitares) siguen libres y nosotros desplazados, bajo amenazas y hostigamiento". Otro desplazado de Tila, señaló: "No logramos el desmantelamiento de Paz y Justicia. Siguen libres los autores intelectuales y los comandantes del Ejército, de Seguridad Pública y los diputados del PRI que estaban detrás de Paz y Justicia en Miguel Alemán. Siguen libres los que tuvieron el enlace con el gobierno, que se concentraban en Miguel Alemán y operaban en El Limar y Nuevo Limar: Marcos Albino Torres, Juan Martínez Pérez, Cristóbal Gómez Torres, Samuel Sánchez Sánchez, Raymundo Hernández Trujillo (...) Hubo muchos muertos y desaparecidos. Raymundo Hernández sigue libre; es el que organiza a la gente ahora. Es uno de los mandones. Mientras no vaya preso, seguirán las amenazas".

"Tampoco han tocado a Rodolfo Aleu, el candidato opuesto al priísta Juan José Díaz Solórzano, quien a su vez cuenta con el apoyo del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo y los sectores 'duros' (del PRI) en Chiapas y Tabasco. Las armas para los paras vienen de Villa Hermosa, Tabasco. Rodolfo Aleu entró a la alianza con el PRD y el PT, porque perdió (en la interna de Paz y Justicia). Aleu sigue las órdenes de Diego Vázquez (preso). El comité municipal del PRD en Tila dudó mucho en entrar en la alianza con Paz y Justicia (pero entró). "Los paramilitares están 'vivos' donde hay un cuartel militar, está Seguridad Pública y controlan los priístas, que manejan mucho dinero. Un caso: Miguel Alemán. Ahí se está rearticulando Paz y Justicia, igual que en Cruz Palenque, bajo el liderazgo de Pedro Mayo".

Otro testimonio: "Los dirigentes (de Paz y Justicia) libres, son los que están reorganizando a la gente. Son ex militares, como el capitán Juan Bautista. Otro ex militar, es Pascual Gómez Velasco, de Nuevo Limar, sucesor de Diego Vázquez. Están los soldados (rasos) Miguel Gómez Pérez y Gilberto López Jiménez. Y otro, no militar, pero que era comandante de Paz y Justicia: Eulalio Martínez Vázquez (...) En la época en que el general Mario Renán Castillo comandaba la VII Región Militar⁶, los jefes operativos eran el general Mario Reyes y el general Herrera.⁷ Además estaban el capitán Juan Bautista y el mayor Adeliz Luna, quien prestaba su convoy a Paz y Justicia. Él era quien hacía 'labor social' (acción cívica); entregaba despensas, atendía la salud (...)

"No se ve que hoy el Ejército esté apoyando a Paz y Justicia. Pero hay apoyo a la paramilitarización vía los diputados que tienen: Jorge Utrilla Robles (diputado federal) y Edgar Martín (diputado local), ambos de Yajalón. Allí donde hay un destacamento del Ejército siguen las amenazas a las comunidades. El contacto con Paz y Justicia, hoy, a través de Díaz Solórzano, es la Seguridad Pública. En el operativo de Tila (febrero de

2005)8, la Seguridad Pública actuó con violencia, como en la época del conflicto. Fue el mismo tipo de operativo. También estaba la Policía Municipal (que opera en las comunidades). Ellos y los de Paz y Justicia son los que señalan a la gente".

Contexto Económico y Social

La falta de solución a las causas del conflicto ha llevado al empobrecimiento de comunidades y al permanente deterioro del tejido social, provocando mayor conflictividad y volatilidad en las relaciones sociales. Algunos de los rasgos que expresan esta tendencia, además de los saldos derivados de la guerra (desplazados, militarización y paramilitarización) son entre otros: la problemática en la frontera; la presencia del narcotráfico y de actores violentos como los "maras"; la creciente migración y los numerosos asesinatos de mujeres, alcoholismo, prostitución, etc. Otra característica importante del momento que se vive ahora es la multiplicación de actores y agendas sociales, tales como la resistencia a las tarifas de luz, la lucha magisterial, la defensa de derechos humanos individuales y colectivos, así como diversas articulaciones antineoliberales y en defensa del territorio y los recursos. Todo ello en un contexto político de impunidad, deslegitimación de la democracia partidaria, privatización del uso de la fuerza, imposición de programas de desarrollo y reformas jurídicas como las llamadas "ley modaza" y "ley antimaras" de corte autoritario y violatorias de libertades políticas y derechos humanos. Este proceso de complejización del contexto y diversificación de luchas sociales, se observó en la visita a partir de la presencia en eventos y diálogo con algunos de estos actores.

Paz con Democracia conoció sobre el avance de los proyectos de desarrollo de corte neoliberal que se están impulsando en el estado, a través de la participación de una delegación del grupo en el "Segundo Encuentro de Comunidades en reservas de la biosfera y Campesinas", realizado en la comunidad de Nuevo Francisco León en Ocosingo, Chis. Con 350 representantes y alrededor de 50 comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California y Chihuahua, se elaboró una agenda común de "defensa del territorio y nuestros recursos" y se plantearon las siguientes ideas centrales: Se sigue negando el derecho de los pueblos indios a la consulta según lo establecido en el Convenio 169 y en los Acuerdos de San Andrés. Los actuales programas gubernamentales atentan gravemente contra los territorios ancestrales propiciando la privatización de la tierra, la mercantilización de los recursos, la contaminación y el uso de transgénicos, así como la destrucción de áreas naturales con grandes obras de infraestructura. Hay una situación de violación sistemática a los derechos agrarios, los derechos indígenas y los derechos ambientales de comunidades y pueblos en reservas. Detrás de la presión sobre el territorio y sus recursos están los intereses de grandes corporaciones multinacionales como Monsanto, Bayer, Adventis, Coca Cola y Nestlé, entre otras.

Para avanzar colectivamente en esta defensa se planteó fortalecer y consolidar la organización de comunidades, pueblos y regiones, partiendo de valores propios y de los sistemas normativos internos para la defensa del territorio. Realizar una amplia labor de información y difusión en los pueblos. Generar mecanismos de coordinación para llevar a cabo las tareas acordadas, brindar asesoría técnica jurídica y para extender una red de contacto y comunicación entre organizaciones y comunidades que comparten esta problemática. Exigir el derecho a consulta aplicando el convenio 169 de la OIT.

Rechazar el Procedo como vía para la privatización de la propiedad social de la tierra.

Este proceso ejemplifica los ejes emergentes de articulación que logran convocar a muy

diversos actores de distintas regiones del país en una agenda común de construcción alternativa: comunidades indígenas, organizaciones campesinas, organismos civiles, agentes pastorales, investigadores, comunicadores y solidarios internacionales en un nuevo tipo de redes incluyentes y flexibles.

Sobre las distintas luchas y conflictos específicos que se han generado en el estado y se mantienen sin canales para su procesamiento y solución, se realizó un encuentro con organizaciones sociales en el cual fueron planteados los siguientes casos: Represión a familias de Petalcingo, Cántico y Nueva Esperanza por operativo policiaco.

Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia. Represión a miembros de Casa del Pueblo, Venustiano Carranza. Comités de ciudadanos en resistencia para el pago de consumo de energía eléctrica por cobros excesivos. La lucha contra la ley mordaza; contra la ley de Bioseguridad. La lucha del Comité pro – liberación de David Meza y justicia para Neyra Azucena Cervantes, víctima de los feminicidios en Juárez.

Se considera que para la comprensión de la actual situación se requiere reconocer la emergencia de nuevas dinámicas, redes y actores sociales, nuevos espacios de convergencia y construcción de alternativas que deben ser integradas al análisis más completo de la nueva etapa del conflicto que vive el país en Chiapas, que al mismo tiempo que lo hacen más complejo, lo enriquecen con las múltiples formas organizativas y creativas de responder a las diversas demandas y aspiraciones sociales.

Un intento de caracterización del conflicto y los actores en la etapa actual.

A once años del estallido de la insurrección campesino indígena zapatista, el contexto internacional está hoy regido por la hegemonía imperial de Estados Unidos, que bajo la coartada de la "guerra al terrorismo" y la defensa de su "seguridad nacional", viene impulsando lo que ha dado en llamarse un neoliberalismo de guerra. Se trata de un modelo en el cual las políticas económicas y financieras neoliberales y la militarización del mundo van de la mano y se retroalimentan.

Las políticas unilaterales de Estados Unidos han erosionado las soberanías nacionales y debilitado en extremo al sistema de Naciones Unidas, y el mundo vive hoy bajo la amenaza del surgimiento de un nuevo autoritarismo violento, que utiliza la guerra preventiva, la mercenarización de los conflictos y la tortura científica como práctica cotidiana, y que ha sido señalado por sus componentes neonazis. Con un nuevo elemento que ha comenzado a emerger durante el segundo mandato de George W. Bush: la eventual utilización de escuadrones de la muerte (paramilitarismo), como parte de la diplomacia de guerra de Washington a escala mundial.

La concepción oficial vigente sobre el conflicto, su regulación y su solución son las que se establecen en la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", aprobada el 11 de marzo de 1995 como marco jurídico propiciatorio, en cuyo Artículo 1º reconoce la existencia de un "conflicto armado", sin abundar en su definición, pero reconociendo su naturaleza político-militar. Esta Ley establece que el EZLN como actor armado es una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas. Aunque se le coloca en una dimensión estatal, se asume que sus causas, y por tanto, las soluciones necesarias, son de orden político, social, cultural y económico.

Sin embargo, actualmente el gobierno lo califica como "un conflicto de naturaleza política local que ya superó la fase de confrontación armada". Sostiene que su dimensión es regional e involucra múltiples actores locales, que obedece a una grave situación histórica de carencias sociales y marginación de las comunidades indígenas, así como a una intensa conflictividad extra, intra e intercomunitaria derivada de motivos

religiosos, ideológicos y políticos. Su estrategia se establece entonces en el impulso de programas de gasto social y de mecanismos de concertación comunitaria para atender la problemática local. Asimismo, explica la presencia militar como una garantía necesaria para asegurar el orden público, vigilar la frontera, combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad nacional en tanto existe una declaración de guerra. En este marco, el conflicto con el EZLN es sólo uno de los componentes del problema.

Para el EZLN, en cambio, se trata de un conflicto armado que ha derivado en una guerra de exterminio, dirigida contra las formas de vida y reproducción comunitarias y que opera bajo la forma de una guerra de baja intensidad, desde una visión de Estado que mantiene la lógica militar como factor dominante para imponer su solución. Frente a ésta, el movimiento zapatista define una estrategia de resistencia activa y autónoma, y de acumulación política y territorial de fuerzas, dirigiendo su discurso y acciones contra las fuentes de legitimidad del Estado. Sostiene que sus causas son estructurales y nacionales, y que para resolverlas se requiere de una profunda transformación del Estado y del modelo económico, a partir del reconocimiento de los derechos indígenas, lucha que es hoy elemento identitario fundamental del movimiento.

A partir de esas dos concepciones, y de las denuncias formuladas a la misión de Paz con Democracia, por diversos actores chiapanecos, que aluden indistintamente a la existencia de una acción bélica gubernamental bajo las modalidades de "guerra integral de desgaste", "guerra de baja intensidad" y "guerra económica", y que alertan sobre una rearticulación de los grupos de poder político y económico tradicionales, así como de una reactivación de bandas paramilitares con apoyo del Ejército, la Seguridad Pública y el PRI local y nacional, podemos concluir que el conflicto de tipo militar sigue vigente, no obstante ese componente no se haya ejercido de manera intensiva y constante en la confrontación entre las partes.

La ausencia de las formas de la guerra abierta no indica el fin del conflicto, sino que a partir de la estrategia del Ejército federal, éste se manifiesta como una guerra contrainsurgente. La concepción y la estrategia del Estado siguen estando signadas por la lógica militar. Como parte del conflicto, el gobierno y el Ejército nacionales siguen actuando en la lógica autoritaria del Estado, desplegando su fuerza de manera desproporcionada. En la zona de conflicto el Ejército garantiza el control territorial, administra y canaliza la violencia, y según la coyuntura podrá recurrir nuevamente a una fase de paramilitarización.

En tanto no asume el carácter estructural del conflicto, la dimensión nacional y profunda de sus causas, la capacidad referencial del EZLN para diversos sectores de la sociedad mexicana y particularmente para los pueblos indígenas, el gobierno federal ha optado por un esquema de achicamiento y de desgaste, procurando imponer soluciones a partir de sus diversas estructuras de poder, particularmente el uso de la fuerza.

A su vez, el rápido viraje estratégico del EZLN hacia la ponderación de la lucha política e ideológica, dentro y fuera de los marcos políticos institucionales de cambio y manteniendo una resistencia armada sin enfrentamientos bélicos en los territorios bajo su influencia, así como el fortalecimiento de su capacidad discursiva y de comunicación contra las fuentes de legitimidad del Estado, establecen una disputa no sólo en términos de causas y proyectos, sino modos de confrontación y vías de solución.

Como actor de nuevo tipo, estratégicamente, el EZLN no plantea la destrucción, sino la transformación del Estado. El uso de las armas tiene un sentido político, y su eje no es la victoria militar o la toma del poder, sino la defensa de la dignidad entendida como la lucha por los derechos sociales, la identidad y la justicia. La resistencia armada que oponen al régimen se dirige más a desarticular los factores de la violencia estructural del sistema, que a la aniquilación física del adversario. El EZLN ha convertido su

representación simbólica y capacidades mediáticas en pieza fundamental de la disputa por la legitimidad entre el Estado y el movimiento.

En ese escenario hay que consignar también que el conflicto se ha trasladado a otros actores y agendas. Es notable la irrupción de nuevos actores, la reactivación de organizaciones campesinas y el crecimiento de la resistencia civil, así como el avance de los planes oficiales neoliberales (Plan Puebla Panamá, ALCA) y la puesta en marcha de otros como el Prodesis, bajo el paraguas de la Unión Europea, que colocan al territorio chiapaneco, en particular a la selva Lacandona y los Montes Azules, como eje de una disputa intercapitalista e interatlántica por los recursos energéticos y genéticos, bajo pantallas "conservacionistas" y "eco turísticas".

Pugna en la que se inscriben, además, la Ley de Bioseguridad aprobada por el Senado mexicano el 15 de febrero de 2005 y la compra de la multinacional mexicana Seminis, del Grupo Savia-Pulsar, del magnate mexicano Alfonso Romo, por la compañía Monsanto, líder mundial en granos y oleaginosas genéticamente modificados, lo que ubica a esa firma de capital estadounidense, favorecida por la administración Bush, en el acceso sur de la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules, rica en agua, biodiversidad y reservas forestales. Ambos hechos no están desligados de la política de expulsión de familias indígenas, en su mayoría bases de apoyo zapatistas, de la zona de Montes Azules.

A partir de estos datos de la coyuntura, Paz con Democracia invita a los movimientos sociales y populares del país a insistir en la necesaria supeditación de la lógica y los actores militares a la lógica y las necesidades de la política, y por ello, como antes, frenar la militarización, paramilitarización, impunidad y polarización crecientes. A mediano plazo, se trata de rehacer las vías y condiciones para una solución política negociada y orientada a la solución de las causas estructurales y nacionales. Para ello, es necesario además rehacer el vínculo del conflicto y de la paz con la necesaria construcción y transformación democrática y de justicia.

Notas

1. En la visita participaron Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Dolores González, Fernanda Navarro, Gilberto López y Rivas, Luis Menéndez, Luis Villoro, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, Pablo Romo, Paulina Fernández y Teresa Estrada. Además, este texto es suscrito por Adelfo Regino, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Guillermo Briceño, Juan Bañuelos, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Oscar González, Pablo González Casanova, Rafael Moreno Villa y Víctor Flores Olea.
2. Reunión de Paz con Democracia con la Red por la Paz Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 17 de febrero de 2005. Ver "Ejes de análisis de coyuntura" de la Red por la Paz Chiapas. Febrero de 2005.
3. "La ocupación militar en Chiapas. El dilema del prisionero". Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, A. C. (Capise). San Cristóbal de las Casas, 2004.
4. El 22 de febrero, un día después de concluida la misión de observación del grupo de Paz con Democracia en Chiapas, la Fiscalía General del estado dio a conocer la detención de uno de los máximos líderes de Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez, en el municipio de Tila. Sánchez, un indígena chol, quien fue señalado el 16 de febrero por el párroco del Señor de Tila, Heriberto Cruz Vera, como uno de "los hombres de confianza" del nuevo presidente municipal, Juan José Díaz Solórzano, está acusado de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, en agravio de los entonces militantes de la organización pro zapatista Abu-Xu. Sánchez había sido

detenido con anterioridad, en octubre de 2000. En esa ocasión también fue acusado de múltiples homicidios y otros agravios contra bases zapatistas de la Zona Norte de Chiapas. A los seis meses fue exculpado de los cargos "por falta de evidencias" y su expediente, según fuentes de la fiscalía, "desapareció". Ver Juan Balboa, "Paz y Justicia busca reactivar la violencia en Chiapas: párroco de Tila", y Ángeles Mariscal, "Detuvieron en el operativo de Tila a Samuel Sánchez, máximo líder del paramilitar Paz y Justicia", La Jornada, 23 de febrero de 2005.

5. El citado Juan Bautista aparece con el rango de "general" y "comandante de unidad" del destacamento del Ejército mexicano en El Limar, Tila, en 1996, según el testimonio vídeo grabado de un testigo que figura en el informe "La política genocida en el conflicto armado en Chiapas", del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (enero de 2005), que ha sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mismo informe lo señala como coordinador de las acciones del grupo paramilitar Paz y Justicia.

6. El general de división DEM Mario Renán Castillo, fue comandante de la VII Región Militar entre 1995 y 1997. Es mencionado varias veces en el testimonio citado en la llamada anterior. Está sindicado como el autor del plan de campaña militar en Chiapas y se le atribuye la edición del Manual de Guerra Irregular, Tomo I y II, del Ejército Mexicano, de 1996. Según varios reportes es el creador de los grupos paramilitares en Chiapas. Asimismo, firmó como "testigo de honor" en un convenio mediante el cual el gobierno entregó \$ 4, 600,000 (pesos) a líderes de SOCAMA y Paz y Justicia en 1996.

7. Se trata, presuntamente, del general de brigada DEM Alberto Martínez Herrera, comandante de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo, Chiapas (1993-2005), ejecutor del plan de campaña militar.

8. El 15 de febrero de 2005, policías estatales desalojaron de forma violenta a cientos de indígenas militantes del Partido de la Revolución Democrática, quienes el 28 de diciembre pasado habían ocupado las instalaciones de la presidencia municipal de Tila, en demanda de que fuera revocado el triunfo electoral priísta. El gobierno estatal que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, recalcó en un comunicado que "aplica el legítimo uso de la fuerza pública". Ver Elio Henríquez y Ángeles Mariscal, "Desalojan a perredistas de la alcaldía de Tila, Chiapas; 19 desaparecidos". La Jornada, 16 de febrero de 2005.

Notas

1) En la visita participaron Alicia Castellanos, Carlos Fazio, Dolores González, Fernanda Navarro, Gilberto López y Rivas, Luis Menéndez, Luis Villoro, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, Pablo Romo, Paulina Fernández y Teresa Estrada. Además, este texto es suscrito por Adelfo Regino, Alfredo López Austin, Ana Esther Ceceña, Guillermo Briceño, Juan Bañuelos, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Oscar González, Pablo González Casanova, Rafael Moreno Villa y Víctor Flores Olea